

Debate público, guerra y desregulación informativa en Colombia

Fabio López de la Roche*

En este artículo intentaré presentar, en una primera parte, algunos elementos de análisis relacionados con la manera en la que los medios de comunicación y el periodismo colombianos cubrieron el proceso de paz llevado adelante durante la administración de Andrés Pastrana. Me detendré especialmente en este proceso en la medida en que su ruptura, a partir de finales de febrero de 2002, explica mucho del curso que ha tomado la política colombiana posteriormente. En una segunda parte abordaré algunos de los problemas y dificultades que la concentración económica y la indolencia gubernamental sobre políticas comunicativas democráticas están generando para el funcionamiento más o menos competitivo del sistema de medios y de las versiones emitidas acerca de la realidad nacional. En una tercera y última parte esbozaré algunas tendencias que se expresan en el campo de la información y del periodismo con posterioridad a la ruptura del proceso de paz con las FARC y bajo la nueva administración del presidente Álvaro Uribe Vélez, en sus primeros siete meses de gobierno.

* Historiador y analista cultural y de medios de comunicación; Profesor Asociado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales (IEPRI) de la Universidad Nacional de Colombia; Director del Instituto de Estudios en Comunicación y Cultura IECO de la misma universidad. Email: flaroche58@yahoo.com

La cobertura periodística del proceso de paz con las FARC

Logros y ausencias de la cobertura

Al no pactarse un cese al fuego, el desarrollo del proceso de paz durante la administración Pastrana (1998-2002) tuvo lugar en medio del conflicto armado. De esa manera, los hechos noticiosos derivados del conflicto bélico (tomadas guerrilleras de pueblos, estallidos de cilindros-bombas contra alcaldías y estaciones de policía de municipios, masacres y enfrentamientos militares), altamente “noticiales” en virtud de su carácter espectacular y dramático, terminaron a menudo haciendo mucho ruido y opacando la visibilidad de algunos avances y logros en la mesa de negociación. Muchos de tales avances y logros resultaron poco espectaculares, y visibles sobre todo para el analista juicioso y agudo, el negociador de paz o el experto en resolución de conflictos.

Hay que reconocer en este punto los importantes esfuerzos e iniciativas adelantados desde la prensa escrita, particularmente desde las Unidades de Paz de los diarios El Tiempo y El Espectador, como también desde otras secciones, para complejizar y dar fondo histórico a la lectura ciudadana del conflicto, para ofrecerle a los lectores elementos de juicio acerca de cómo han sido los procesos de negociación de conflictos armados internos en otras latitudes y cómo se propiciaron o se dificultaron los procesos de aproximación entre

las partes. No solo entrevistaron a personajes como el señor Villavicencio, negociador en Sudáfrica, a comandantes centroamericanos como Ana Guadalupe Martínez, a mediadores europeos y norteamericanos en otros conflictos bélicos, sino que intentaron darle fondo y perspectivas complejas de análisis al ciudadano lector de prensa construyendo una relación dialógica con saberes sobre el conflicto armado colombiano menos coyunturales y más históricos y estructurales, acumulados como productos de la reflexión académica de universidades e institutos de investigación nacionales.

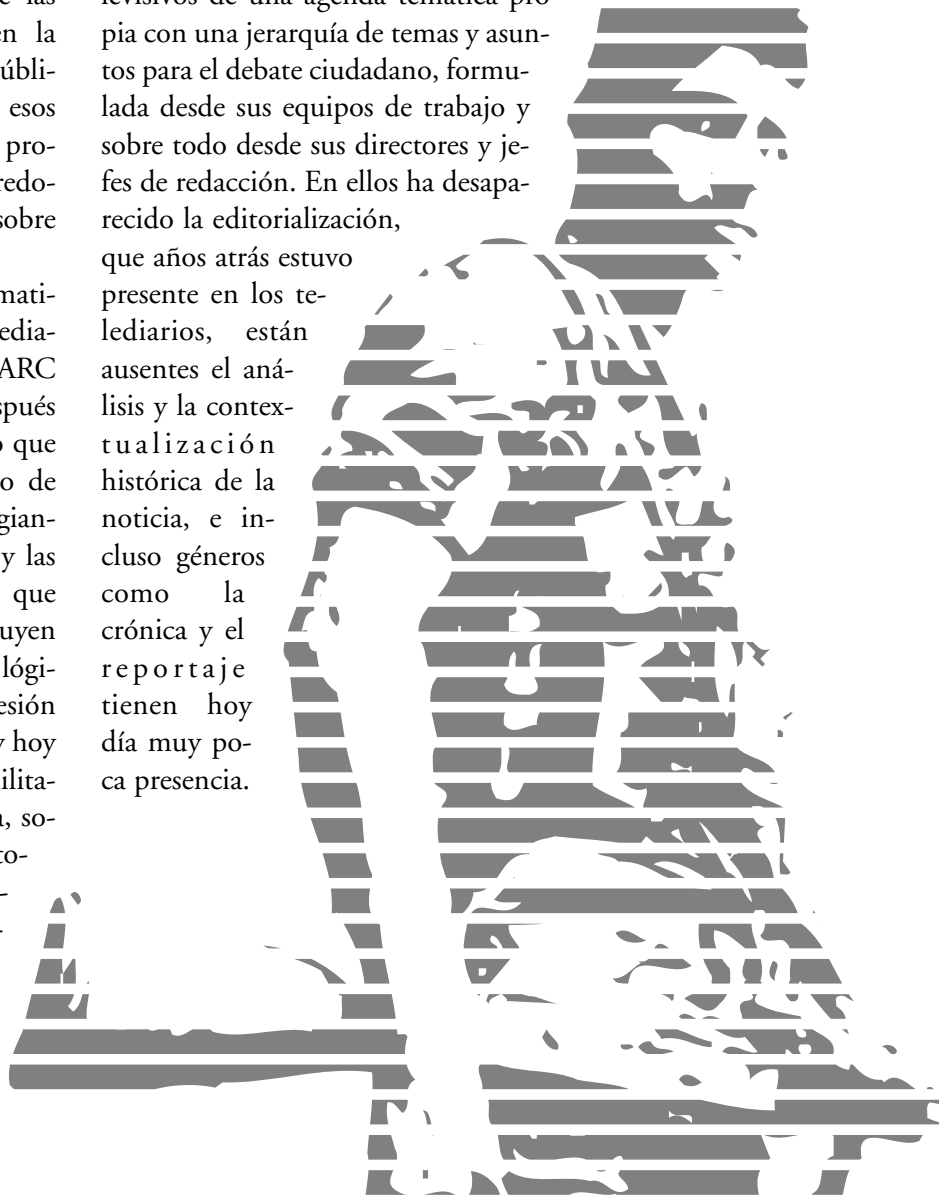
Sin embargo, y en notorio contraste con lo que pasaba en prensa escrita con las Unidas de Paz, los dueños y directores de noticieros televisivos, escenario mediático hegemónico en la construcción de la *visibilidad comunicativa masiva* del proceso de paz, no evidenciaron una particular conciencia de las funciones, roles y responsabilidades en la configuración de los climas de opinión pública hacia el proceso de negociación. En esos espacios clave para la orientación de un proceso de reconciliación nacional, siguió predominando el *rating* y el interés comercial sobre el interés nacional y el interés público.

En la cobertura de los sucesos informativos de la vida nacional que hacían los telediarios durante el proceso de paz con las FARC primó -y continúa primando ahora después de la ruptura del mismo- un periodismo que presentaba los hechos de orden público de manera inconexa y fragmentaria, privilegiando las escenas y situaciones dramáticas y las expresiones de dolor de las víctimas, que abundan en nuestro país y que constituyen hechos altamente “noticiales” desde las lógicas y rutinas ocupacionales de la profesión periodística. No hubo entonces, ni la hay hoy día, información sobre las estrategias militares y políticas de los actores de la guerra, sobre sus proyecciones estratégicas en territorios y geografías regionales, sobre los aspectos tecnológicos y propiamente militares del conflicto armado interno y menos sobre la economía política de la guerra y las maneras cómo ella expli-

caría el comportamiento de los actores armados.

En este periodismo televisivo que presenta inconexos y caóticos a hechos de orden público no se utilizan mapas del país y de sus regiones para ayudarle a los colombianos a comprender el curso diario de los hechos bélicos. Las víctimas de las masacres paramilitares o guerrilleras aparecen muchas veces sin identidades claras, sin nombres ni oficios, como meros datos estadísticos, y las notas periodísticas que cubren estos hechos de terror con frecuencia penetran poco en los móviles de los hechos y en su ubicación dentro de las estrategias políticas y militares de quienes los cometen.

Causa y consecuencia de este periodismo coyunturalista, dramático y sensacionalista, es la ausencia en los espacios noticiosos televisivos de una agenda temática propia con una jerarquía de temas y asuntos para el debate ciudadano, formulada desde sus equipos de trabajo y sobre todo desde sus directores y jefes de redacción. En ellos ha desaparecido la editorialización, que años atrás estuvo presente en los telediarios, están ausentes el análisis y la contextualización histórica de la noticia, e incluso géneros como la crónica y el reportaje tienen hoy día muy poca presencia.





Hacia el futuro habría que evitar la creación de expectativas facilistas y ayudarle a la opinión pública a construir visiones complejas de los senderos de la reconciliación. De lo contrario, seguiremos fluctuando de entre la euforia y el desencanto con la paz, sin capacidad de aprender de las experiencias del pasado.

Guerra, polarización y parcialización de la información

La cultura política de una sociedad nacional, así como las culturas políticas particulares de actores políticos y sociales, tales como sus políticos profesionales, su estamento militar, su sindicalismo, su empresariado, su izquierda, sus trayectorias históricas y sus particulares procesos de construcción de sentidos y representaciones sobre la nación y sobre el otro político, están a la base de los procesos de comunicación política en una sociedad. Constituyen la trama de significaciones y sentidos desde los cuales se realizan la producción y la recepción de los mensajes de los medios de comunicación.

En una sociedad como la colombiana, profundamente fragmentada desde el punto de vista de sus exclusiones sociales, notoriamente polarizada desde lo político-ideológico, con sectores amplios de su población que han recibido agravios y acumulado resentimientos y odios derivados de la extorsión, el secuestro o el homicidio guerrillero, de la masacre paramilitar, del despojo de sus bienes y el desplazamiento forzado debido a la guerrilla o al paramilitarismo, o de abusos y extralimitaciones de miembros de organismos militares, policiales y de inteligencia del Estado, es muy difícil -podríamos decir casi imposible- un funcionamiento equilibrado y ecuaníme del periodismo y de los medios de comunicación masiva a la hora de cubrir un proceso de paz en medio de un conflicto armado. Esos odios y polarizaciones no pueden dejar de afectar los procesos de producción y de recepción social de la información noticiosa sobre el conflicto armado y sobre la negociación.

La cobertura del proceso de paz se vio muy afectada por esas visiones pasionales del conflicto colombiano que aparecen a menudo hoy día, atropelladoras y viscerales, en cualquier conversación cotidiana sobre el tema entre desconocidos, en eventos académicos, en conversaciones de café o debates en recintos universitarios. En una situación de tan fuerte polarización de la opinión ante el conflicto armado interno es mucho más grave la ausencia -desde los espacios masivos televisivos de opinión e información- de arreglos institucionales conducentes a una cobertura más cuidadosa y equilibrada de la información sobre el conflicto armado, el proceso de paz y la negociación política.

Lo que observamos a menudo durante los tres largos años del proceso de paz bajo la administración Pastrana fue la toma de partido a favor del Estado, de las visiones de los empresarios dueños de los medios, y la toma de partido por las opiniones de las fuentes oficiales consultadas, reproducidas muchas veces por los medios como si fueran la palabra de Dios.

No hubo nunca un seguimiento crítico y una clara fiscalización por parte de los medios y del periodismo a la política gubernamental de paz, a las acciones y omisiones de quienes la manejaron. Un seguimiento crítico e independiente por parte del periodismo a la conducción gubernamental del proceso de paz tampoco tenía que reducirse, como muchas veces lo hizo, a darle la voz a los críticos de derecha y a los enemigos acérrimos y declarados de la negociación política en los partidos o en el congreso.

Sin sugerir que estas voces debieron ser ignoradas, hay que anotar que con respecto al proceso de paz, la crítica generalmente recayó sobre la falta de voluntad política de la insur-

gencia para sentarse seriamente a negociar en la mesa (crítica por lo demás válida), pero muy poco se abordaron las insuficiencias y falta de compromiso del gobierno con un proyecto serio y coherente de paz y de país posconflicto, más allá de la retórica y la indudable buena voluntad del presidente Pastrana hacia la paz.

No hubo una crítica de fondo sobre una serie de aspectos que evidenciaban la ausencia de un proyecto gubernamental conducente a una senda clara de reconciliación nacional: la ausencia de un proyecto social reformista que ataque las condiciones estructurales que alimentan la insurgencia sobre todo en áreas campesinas deprimidas y zonas de colonización; la falta de garantías para la actividad sindical, periodística, judicial, para la política de oposición o de defensa de los derechos humanos, en un país con el más alto índice de asesinatos de líderes sindicales y periodistas en el mundo (¿quién se va a embarcar seriamente en un proceso de paz sin garantías para la vida y la seguridad personal y familiar?); el no-diseño de una política civil y militar de protección a la población civil en medio del conflicto; la carencia de liderazgo con respecto a una reforma política de fondo; la falta de una política eficaz y de participación ciudadana contra la corrupción oficial y los delitos de cuello blanco; la fragmentaria representatividad social de los negociadores gubernamentales; la ausencia de una política de empleo; las tensiones permanentes entre el ejecutivo y el estamento militar alrededor de la política de negociación y de la zona de despeje; la falta de una política militar unificada y de liderazgo del poder civil sobre el estamento militar alrededor de un discurso único y una política coherente y estratégica de paz.

Seguramente esta falta de problematización del proceso de negociación y de las complejas tareas sociales y gubernamentales necesarias para obtener la paz, contribuyó también a sembrar en la opinión pública un cierto facilismo y unas expectativas falsas sobre la paz como algo fácil y rápido de lograr. Creo que hacia el futuro habría que evitar la crea-

ción de esas expectativas facilistas y ayudarle a la opinión a construir visiones complejas de los senderos de la reconciliación. De lo contrario, seguiremos como opinión pública fluctuando de manera ciclotímica entre la euforia y el desencanto con la paz, sin una capacidad de aprender colectivamente de las experiencias del pasado.

Otro problema en la cobertura informativa del conflicto, presente sobre todo en la televisión pero también en los otros medios, tuvo que ver con la puesta en escena sensacionalista y melodramática del conflicto y la negociación en los propios formatos de opinión. Los generadores de opinión en los espacios televisivos, los cuales debieron haber ofrecido a la sociedad elementos de juicio para digerir la complejidad de la negociación en medio de la confrontación militar y haber dado fondo, contexto histórico y comparativo internacional a sus audiencias, optaron muchas veces por el sensacionalismo y el melodrama en la escogencia de sus temas y maneras de abordar el proceso de paz y de negociación y situaciones conexas con él, como el secuestro de niños por la guerrilla o la muerte -afectado por un cáncer- del niño Andrés Felipe, sin poder ver a su padre, un oficial retenido por la guerrilla.

Esos hechos noticiosos, que por supuesto no podían dejar de ser abordados por los medios y el periodismo, muchas veces fueron asumidos como verdaderas cruzadas mediáticas sin medir los efectos contraproducentes de esas campañas con respecto a los fines buscados (la liberación de los niños secuestrados o del padre de Andrés Felipe) y los potenciales impactos negativos sobre los climas de opinión y estados de ánimo de la población con respecto al apoyo a la negociación de paz¹.

1 Sobre la cobertura del caso del niño Andrés Felipe véase la opinión del analista mexicano Carlos Monsiváis invitado como ponente central a la conferencia internacional "Los medios informativos en peligro", organizada por la Asociación Mundial de Periódicos (WAN), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y la Asociación de Diarios Colombianos (Andiarios), el viernes 22 de marzo de 2002 en Bogotá, Entrevista a Carlos Monsiváis, *El Tiempo*, sábado 23 de marzo de 2002.

La cobertura noticiosa de este tipo de situaciones mostró la dificultad del periodismo colombiano para trascender la inicial y de sentido común reacción visceral y condenatoria hacia la insurgencia, y avanzar hacia el logro de una mayor capacidad de interpelación crítica y argumentada a las acciones de la guerrilla. Quiero decir, en este sentido, que los medios deben tener cuidado con las pasiones y estados de ánimo que propician y alimentan con sus mensajes y puestas en escena de los conflictos. Ya los propios abusos de la insurgencia (extorsión, secuestros, boleteo, asesinatos o muertes de secuestrados en cautiverio) han creado -por sí solos- dolores, actitudes visceralmente antiguerrilleras o intenciones de retaliación y de venganza en sus víctimas y familiares.

Tratamientos de sucesos informativos como el caso del niño Andrés Felipe, convertido en una verdadera cruzada, y otros similares que se construyeron desde los medios masivos durante los tres años del proceso, mostraron dificultades en el periodismo para trascender cierta lógica primaria de condena y de juzgamiento mediáticos al interlocutor guerrillero. Un tratamiento comunicativamente ineficaz para las necesidades de acercamiento entre las partes y de avance de la negociación.

Creo que en cuanto al papel del periodismo en la interpelación crítica a la insurgencia en medio de una negociación política -y esto es conveniente tenerlo en cuenta hacia el futuro cuando soplen de nuevo vientos de paz y de negociación-, requerimos trascender la acusación muchas veces moralista y facilista, desde un cierto sentido común elemental y básico de condena al guerrillero, para configurar una *capacidad de interpelación ética y política* al accionar insurgente que, antes que condenarlo, le siembre cuestionamientos y dudas en torno a su militarismo, su falta de visión política en sus relaciones con la población, sus cercanías con la delincuencia común, sus rigideces ideológicas y anacronismos doctrinarios, y le ayude a acercarse a una comprensión fresca y menos acartonada de este país: de sus nuevas generaciones, sus va-

lores, dilemas e ideales; de la complejidad cultural y política de los contextos urbanos y metropolitanos; de las transformaciones en el plano internacional, etcétera. Interpelación inteligente, que supone diálogo y respeto por el otro, y no simplemente acorralamiento o la lógica del ajuste de cuentas a la hora de la entrevista al líder insurgente.

La zona de distensión y su caracterización como “laboratorio de paz” o como “guardia de delincuentes” fue otro de los temas álgidos alrededor del cual se dio una verdadera guerra de versiones informativas y des-informativas. Las fuentes militares y policiales, presas de su comprensible animadversión hacia su enemigo político-militar, y de sus ligerezas retóricas, metieron permanentemente notorios goles informativos que incidieron fuertemente (adicionales a los abusos cometidos *efectivamente* por la insurgencia de las FARC en la zona de despeje) en el desprestigio del Caguán y en la apreciación negativa por parte de la ciudadanía, de la marcha de las conversaciones y del mantenimiento de la zona de distensión.

El caso más grave fue el del asesinato de doña Elvia Cortés en Simijaca el lunes 15 de mayo de 2000 con un “collar-bomba” ajustado a su cuello por parte de delincuentes comunes, como posteriormente se estableció. Sobre la base de la imputación apresurada de ese crimen a las FARC por parte del comandante de la Policía Nacional, el general Rosso José Serrano y por altos oficiales militares, imputación que fue recogida acriticamente por el conjunto de los medios de comunicación y por el propio presidente Pastrana, el gobierno canceló provisionalmente una importantísima audiencia con delegados internacionales programada dentro de las conversaciones de paz. Por los impactos desfavorables a la negociación que esta noticia tuvo en la opinión pública, el propio proceso de diálogo se vio afectado gravemente en sus posibilidades de continuar².

2 Sobre estos impactos negativos, las reacciones de la opinión a la noticia del “collar-bomba”, así como las mo-



Los medios no actuaron de manera imparcial, ni lo hicieron durante los años de la negociación. Algunos tomaron partido no solo en contra de un proceso al cual la sociedad le percibía cada vez menos su utilidad sino, en la coyuntura electoral, a favor del candidato del orden y de la mano dura contra la guerrilla.

Seis meses después de los hechos, evaluando el caso del collar-bomba, el negociador oficial Fabio Valencia Cossio planteó en estos términos el impacto negativo jugado por ese falso hecho informativo en el curso de la negociación: “Vino el collar bomba. Hubo un error del Estado, mucha precipitud de las autoridades policiales y militares en el señalamiento de los responsables. Ese fue un rudo golpe para las FARC, que después se devolvió contra el Estado. A partir de allí las FARC endurecieron mucho su posición” (Valencia Cossio 2000).

En una revisión atenta de cualquier archivo noticioso televisivo de los tres años del proceso de paz con las FARC podemos encontrar numerosos y variados ejemplos de distorsiones a la información y a la verdad de los hechos, derivadas de la ideología y de los intereses estratégicos de los militares y jefes policiales en el conflicto armado interno. En el desarrollo del conflicto armado y del proceso de paz con las FARC durante el año 2000 vimos graves casos de ligereza informativa del medio noticioso televisivo, ligados a la no confirmación de la información inicial brindada por la fuente militar o policial. En la cobertura de la toma de las FARC a la población de Arboleda (Caldas), Noticias RCN presentó, recurriendo una vez más aventuradamente al condicional “habría”, y sobre la base de la información no contrastada ni confirmada de un alto oficial de la policía, la versión de que “los guerrilleros *habrían* jugado

fútbol con las cabezas de los policías”, versión aparecida en los titulares del teletinformativo. Otras versiones militares endebles y mal sustentadas que luego tuvieron que rectificarse fueron las del Comandante de la Fuerza Aérea General Héctor Fabio Velasco sobre el supuesto desembarco por parte de un avión ruso de un cargamento de armas para las FARC en la zona de distensión³; la supuesta muerte del Mono Jojoy⁴ anunciada por un oficial del ejército quien argumentó que tenía información fidedigna y detallada de que el líder de las FARC había sido asesinado por un guerrillero a quien éste le habría quitado la novia; y la aseveración de un comandante de brigada a un noticiero en términos de que una avioneta que aterrizó una madrugada en el aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón de la ciudad de Cali venía de transportar droga desde la zona de despeje, versión que fue desmentida en la misma emisión por el propio comandante de la Fuerza Aérea, general Héctor Fabio Velasco, quien afirmó que se había establecido que la aeronave venía de dejar un cargamento de droga en Guatemala.

Tal vez refiriéndose a la falta de vocerías claras en las Fuerzas Militares y a este tipo de informaciones aventuradas por no-confirmadas que luego tienen que rectificarse o que muchas veces no se rectifican y terminan sembrando en la opinión sombras de duda sobre la confiabilidad de las versiones de la fuente militar, un experto extranjero en temas de comunicación pública afirmó en un evento sobre medios de comunicación y fuerza

vilizaciones estudiantiles de condena a las FARC y la atmósfera de consternación ante la barbarie guerrillera que presidió el entierro de doña Elvia en Chiquinquirá, reacciones todas suscitadas por este falso suceso informativo, pueden consultarse los periódicos *El Tiempo* y *El Espectador* de los días 17 y 18 de mayo de 2000.

3 Véase el noticiero “En Vivo 9:30”, emisión del jueves 14 de octubre de 1999 y “Noticias RCN”, emisiones de las 7:00 y las 9:30 de la noche del mismo día.

4 El “Mono Jojoy” es el pseudónimo o alias del comandante de las FARC Jorge Briceño.

pública que “los militares colombianos hablan mucho y hablan muchos”⁵.

Camilo Gómez, Comisionado de Paz del gobierno de Pastrana desde comienzos de 2000 hasta el cambio de gobierno de agosto de 2002, ha expresado en una reciente entrevista, refiriéndose a las realidades y ficciones interesadas alrededor de la zona de despeje, que “la zona de distensión no era un paraíso pero tampoco era el infierno que muchos quisieron hacer creer” (Gómez 2002).

La concentración económica como factor estimulante del empobrecimiento del debate público

Colombia asiste hace varios años a un notorio proceso de concentración de los medios de comunicación en manos de los dos grandes grupos económicos y financieros: el Grupo Ardila Lulle, del cual hace parte RCN, (originalmente “Radio Cadena Nacional”), y el Grupo Santodomingo o Grupo Bavaria, copropietario de Caracol. La apertura a la competencia abierta en el sistema televisivo colombiano a partir de 1997, cuando RCN y Caracol adquirieron por 95 millones de dólares cada uno su derecho a operar como canales privados y autónomos, y la falta de una política pública coherente para el mantenimiento y desarrollo de la pluralidad política y social en el sistema televisivo, condujeron progresivamente a la pérdida de audiencia de los canales televisivos públicos 1 y A.

La situación de abandono de los canales procedentes del sistema mixto (un sistema semipúblico donde el Estado colocaba la infraestructura tecnológica y a través de licitaciones otorgaba a programadoras privadas las franjas y les arrendaba equipos y estudios) llevó a la desaparición de varias programadoras históricas que habían logrado un lugar importante en la producción televisiva nacional

así como en la memoria de la teleaudiencia, o a su reacomodo funcional a las demandas del mercado global (léase norteamericano) y de los gustos comercialmente moldeados de las audiencias hispanas en Estados Unidos. No hubo una planeación responsable, desde el punto de vista político y cultural, de la reconversión del sistema mixto a un sistema multi-canales de base privada, que preservara las cosas buenas del anterior ordenamiento televisivo y la trayectoria de algunas programadoras que hicieron época en el desarrollo de géneros y estilos en la televisión colombiana⁶.

La metáfora de ese abandono de los canales 1 y A ha sido en los últimos años la presencia reiterativa y rutinaria en la emisión de esos dos canales, de las televentas y de la oferta de fajas y demás dispositivos para adelgazar, evidencia simultánea del peso creciente de ciertas tendencias livianas y consumistas del mercado global, pero también de la desidia de nuestra clase dirigente, de su escasa o nula preocupación por la diversidad y el pluralismo político y cultural de la comunicación masiva, y de su complicidad con los grandes grupos de poder económico y financiero.

Mientras tanto, algunos noticieros y espacios de opinión de estos dos canales han tenido que desaparecer, reducir sus plantas de personal, en algunos casos compartir entre dos noticieros sus camarógrafos y periodistas para poder mantenerse con menores costos o, finalmente, fusionarse en un solo telediario. Y los periodistas han terminado a menudo desempleados, haciendo dos trabajos por el precio de uno, o trabajando a destajo en múltiples coberturas y labores *free lance* que reducen notoriamente la calidad de la investigación y la escritura periodística⁷.

5 Foro sobre Medios de Comunicación y Fuerza Pública, Apuntes personales, Paipa, noviembre de 2001.

6 Sobre el papel de algunas de esas programadoras y en particular de RTI véase el apartado “Del teleteatro a la telenovela: géneros televisivos y modernidad cultural”, en Martín-Barbero, Jesús y Germán Rey, *Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva*, Gedisa, Barcelona, 1999.

7 Sobre la reducción radical de espacios noticiosos y de programadoras televisivas, véase Rincón, Omar, “La *televisación* de la política (Uribe: ¿una producción de

Algunos de los resultados de esta apertura y reconversión mercantilista sin reglas claras del juego son hoy día los abusos de la pauta publicitaria expresados en la publicidad camuflada o abierta en noticieros, ficción y cine de autor; el destierro de los programas de opinión de los horarios Triple A en virtud de la *telenovelización* de los horarios de alta sinfonía; la conversión consecuente de los programas de debate y de opinión en espacios para noctámbulos; y un exagerado unanimismo ante temas que demandarían para su esclarecimiento amplios, fuertes y plurales debates ciudadanos.

A este dato duro de lo que ocurre hoy con *nuestra* televisión, se suman otros no menos contundentes, como la desaparición del diario nacional El Espectador, un diario liberal de reconocidas cartas democráticas, histórico, fundado a finales del siglo XIX, el cual desaparece como diario (ahora es un semanario que sale solamente los domingos) y es adquirido por el grupo empresarial Bavaria. También la nueva situación hegemónica del periódico El Tiempo, diario de la familia Santos (ahora convertido en un grupo multimedial familiar), que es hoy día el único periódico de circulación nacional. Estos hechos constituyen factores internos que están incidiendo en la homogeneización de la opinión y en la pérdida de pluralidad de voces e interpretaciones en el sistema informativo y comunicativo colombiano, sin que queramos decir con esto que la situación anterior en cuanto a diversidad política y cultural en nuestro sistema de medios fuese la mejor. Si antes los noticieros televisivos estaban concentrados en manos de las familias o empresas mediáticas pertenecientes a cinco expresidentes de la república, hoy día están en manos de los grandes potentados económicos.

la realidad o una historia de ficción?)”, en Revista *Foro*, Número 45, Número Temático dedicado a “Comunicación, opinión pública y cultura política”, Fundación Foro Nacional por Colombia, Bogotá, 2002.

Rupturas, inercias y continuidades bajo el nuevo gobierno de Uribe Vélez

La desconfianza mutua entre los negociadores gubernamentales y los delegados de la insurgencia en la mesa de negociación no se pudo romper jamás durante los tres largos años que duraron las conversaciones de paz en la así llamada “zona de despeje”. La coincidencia del inicio de las conversaciones de paz con la fase de diseño y arranque del Plan Colombia resultó problemática para la generación de confianza. Inicialmente presentado con una orientación preferencialmente antinarcóticos, el Plan Colombia fue develando poco a poco también -y en medio de los obstáculos, falta de reglas del juego para el manejo de la zona de despeje y tensiones suscitadas en la mesa de negociación-, sus contenidos contrainsurgentes.

Del lado de la guerrilla no faltaron actitudes y comportamientos estimulantes de la desconfianza. Las FARC llevaron a cabo permanentemente durante esos tres años destrucciones sistemáticas de pueblos y de estaciones de policía, no suspendieron jamás la práctica del secuestro y la extorsión y utilizaron sistemáticamente la zona de distensión para guardar secuestrados, para fortalecerse y capacitarse militarmente para la guerra. Su autoritarismo, su soberbia militarista y discursiva, su autoconvencimiento de estar ganando la guerra, su rigidez ideológica, la ausencia en ella de un pensamiento y un discurso renovado, capaz de entender el país en su complejidad y diversidad, y su falta de una visión política para relacionarse con la sociedad y para construir un discurso menos esquemático y acartonado durante ese período de negociación (cuando tuvo micrófonos, cámaras y medios a través de los cuales pudo haber interpelado de otra manera a la sociedad colombiana), fueron también elementos que incidieron en la erosión de la confianza entre las partes en medio de las conversaciones de paz de San Vicente del Caguán.

El desarrollo por las FARC, luego de la ruptura de las negociaciones y de la termina-

ción de la zona de despeje en febrero del 2002, de una serie de actos terroristas en varias ciudades del país, su decisión de extender progresivamente la guerra a las ciudades, los atentados realizados por esta organización contra el candidato presidencial Uribe Vélez durante la campaña y la continuación de sus prácticas de “pescas milagrosas”, secuestros individuales, extorsiones y destrucciones de pueblos, fueron uno de los factores que crearon en la opinión un clima favorable a la elección de Uribe Vélez.

La polarización de la opinión y el creciente peso, no solo en las élites empresariales y políticas sino en amplios sectores de la población, de posiciones a favor del orden, de la autoridad y de la mano dura y en contra de las conversaciones de paz que ahora juzgaban inconvenientes a la luz de lo sucedido con la zona de despeje, tendieron a favorecer al candidato que prometía la restauración del orden y el combate decidido a la guerrilla.

Los medios no actuaron de manera imparcial, inocentemente, ni lo hicieron antes, durante los años de la negociación, como bien lo he argumentado en la primera parte de este escrito. Algunos de ellos, presionados tal vez por las posiciones políticas de sus directores o de sus dueños, tomaron partido no solo en contra de un proceso al cual cada vez menos la sociedad le percibía su utilidad, sino, en la coyuntura electoral, a favor del candidato del orden y de la mano dura contra la guerrilla⁸.

Las necesidades de seguridad de la población y de contención militar de la guerrilla que desde 1997 ha venido ganando una notoria movilidad territorial y una mayor capacidad de afectar con sus acciones (secuestros individuales y masivos, quema de tractomulas y vehículos de carga, bloqueos de vías). La movilización de personas y mercancías en las

principales troncales del país, sumadas a la voluntad del gobierno Uribe de golpear decididamente la capacidad militar de la insurgencia, se han traducido en la adopción de una legislación de excepción, hasta ahora dentro de los límites de la Constitución, la cual regula, controla y gradúa la aplicación del “estado de conmoción interna”. La aplicación del estado de excepción no ha estado exenta de abusos y arbitrariedades por parte de las autoridades. El gobierno estableció a comienzos de su mandato los “lunes de las recompensas” para fomentar la delación y dar recompensas económicas a informantes que aportaran evidencias de actividades y comportamientos delincuenciales de personas ligadas a las guerrillas o al apoyo de sus actos. En la televisión empezaron a verse escenas bastante grotescas donde informantes encapuchados con pasamontañas recibían de parte de algún oficial del ejército o de organismos de seguridad de la región fajos de billetes como recompensa por las informaciones brindadas. Estas escenas disgustaron a algunos sectores de la población que manifestaron su inconformidad por esa forma tan pragmática y burda de conquistar el apoyo ciudadano. El estímulo a ese tipo de prácticas de delación ha dado lugar también a acusaciones apresuradas e injustas que se han traducido en capturas, indagaciones y actividades judiciales arbitrarias.

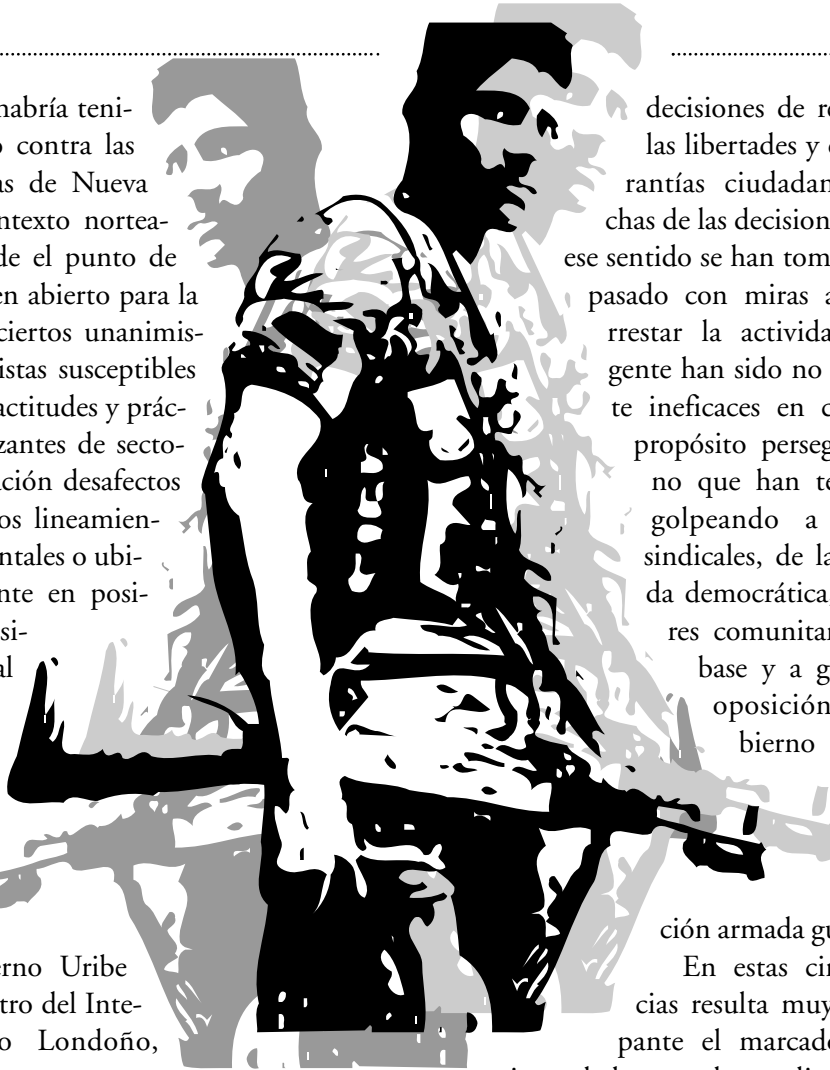
El reciente atentado terrorista perpetrado por las FARC en la ciudad de Bogotá, contra un exclusivo club de la elite económica y política, el Club El Nogal, donde murieron más de treinta personas y resultaron heridas doscientas, constituyó un serio desafío de la guerrilla a la política de “seguridad democrática” del presidente Uribe. Los efectos de este atentado han sido el endurecimiento del discurso gubernamental, así como el de los medios de comunicación, ahora decididamente proclives a calificar al antagonista guerrillero como terrorista y delincuente a secas, sin ningún atenuante de tipo político. Algunos analistas han atribuido a la acción contra el Club El Nogal efectos similares -aunque a nivel nacio-

8 Sobre los desequilibrios de los medios en la cobertura de la campaña electoral presidencial del 2002 y sobre la parcialidad de algunos medios a favor del candidato Uribe, véase Miralles, Ana María, “Medios y elecciones. La fabricación del consenso”, en revista *Foro*, Número 45, Fundación Foro Nacional por Colombia, Bogotá, 2002.

nal- a los que habría tenido el atentado contra las Torres Gemelas de Nueva York en el contexto norteamericano, desde el punto de vista del margen abierto para la expansión de ciertos unanimismos antiterroristas susceptibles de incurrir en actitudes y prácticas estigmatizantes de sectores de la población desafectos o críticos de los lineamientos gubernamentales o ubicados claramente en posiciones de oposición política al gobierno.

Ya antes de los sucesos del Club El Nogal, algunos funcionarios del gobierno Uribe como su ministro del Interior Fernando Londoño, muestran permanentemente un talante autoritario y sectario con quienes disienten de los lineamientos gubernamentales llamándolos “traidores” o “apartidas”. Bajo la influencia del atentado terrorista contra El Nogal, al interior del gobierno y en círculos cercanos a él se ha intentado diseñar algunos proyectos de censura a la prensa ligados a un eventual estatuto de seguridad donde se han llegado a contemplar penas de cárcel de hasta de 15 años a quienes desde el oficio periodístico “mejoren la imagen del enemigo”. Afortunadamente se han pronunciado en contra de tal engendro personalidades importantes de la vida política y del periodismo.

En estos últimos días (comienzos del mes de marzo de 2003) el Fiscal General de la Nación, Luis Camilo Osorio, y el Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, se pronuncian a favor de conceder facultades extraordinarias al Presidente de la República, las cuales muy probablemente se traducirían en



decisiones de recorte de las libertades y de las garantías ciudadanas. Muchas de las decisiones que en ese sentido se han tomado en el pasado con miras a contrarrestar la actividad insurgente han sido no solamente ineficaces en cuanto al propósito perseguido, sino que han terminado golpeando a sectores sindicales, de la izquierda democrática, a sectores comunitarios y de base y a grupos de oposición al gobierno no necesariamente ligados a la acción armada guerrillera.

En estas circunstancias resulta muy preocupante el marcado unanimismo de los grandes medios masivos de comunicación, el cual podría fácilmente derivar, en virtud del clima de polarización actualmente imperante, en la invisibilización o estigmatización de vertientes disidentes o alternativas de la opinión pública. A ello estarían expuestos aquellos sectores que trabajan en la defensa de los derechos humanos y de la aplicación de las normas del DIH, o quienes desarrollan un activismo social y político a favor de la paz y de soluciones políticas y negociadas al conflicto armado interno colombiano y tienen clara conciencia de los costos humanos y económicos de la guerra.

Uno de los retos mayores para el periodismo y los profesionales de la comunicación social en estas difíciles circunstancias por las cuales atraviesa Colombia, es la defensa de la verdad en la información acerca no solamente de las realidades del conflicto armado interno, sino también de otros temas claves de la vida nacional: la corrupción, la soberanía

nacional, el crecimiento de la pobreza, el abandono del campo, la urbanización de los imaginarios sociales y el desconocimiento colectivo sobre la vida campesina, entre otros.

La situación no es fácil en un país donde tanto los periodistas como los académicos debemos enfrentar hoy día distintas formas de censura y de autocensura en virtud del miedo, de las amenazas reales o imaginadas, y de la ausencia de seguridad y garantías básicas para el ejercicio crítico de la actividad periodística o de la investigación y la docencia universitarias, sobre todo cuando estas entran a escudriñar y a cuestionar actitudes y procedimientos de actores institucionales o extrainstitucionales con licencia para acallar y silenciar para siempre al otro.

Lejos están, hoy día, nuestros medios de comunicación y nuestros intelectuales de la posibilidad de estimular un diálogo plural y franco sobre nuestros conflictos y alternativas y de propiciar las actitudes de autosinceramiento y las solicitudes y daciones de perdón que esta sociedad va a requerir para reparar sus pasados y actuales desgarramientos. La sensación actual es la de estar entrando en un largo y tal vez inevitable capítulo de guerra y dolor. Sin embargo, hay en la vida colombiana, en sus gentes sencillas, en sectores de su intelectualidad y de sus artistas, en el mundo del periodismo, reservas de sinceridad, de inteligencia, de valor civil, de búsqueda de convivencia, de creatividad y de vida, de generosidad en medio del dolor, que han pugnado antes y seguirán pugnando ahora, por darle a este país un destino y un-otro sentido colectivo. De sus esfuerzos y aproximaciones va a

depender seguramente el encuentro de caminos hacia la reconciliación nacional y hacia la construcción de una sociedad que reconvierta sus actuales potenciales de muerte y destrucción en formas nuevas de tramitación de sus conflictos y en propósitos de mejora de su vida colectiva material y espiritual.

Bibliografía

- Gómez, Camilo, 2002, "FARC, autistas y vendedoras de falsas ilusiones", Entrevista con el Comisionado de Paz Camilo Gómez, Lecturas Dominicales de *El Tiempo*, domingo 28 de julio, pág. 3.
- Martín-Barbero, Jesús y Germán Rey, 1999, *Los ejercicios del ver. Hegemonía audiovisual y ficción televisiva*, Gedisa, Barcelona.
- Miralles, Ana María, 2002, "Medios y elecciones. La fabricación del consenso", en revista *Foro*, No. 45, Número Temático dedicado a "Comunicación, opinión pública y cultura política", Fundación Foro Nacional por Colombia, Bogotá.
- Monsiváis, Carlos, 2002, "Entrevista a Carlos Monsiváis", Periódico *El Tiempo*, Bogotá, sábado 23 de marzo.
- Rincón, Omar, 2002, "La *televisación* de la política (Uribe: ¿una producción de la realidad o una historia de ficción?)", en Revista *Foro*, No. 45, Número Temático dedicado a "Comunicación, opinión pública y cultura política", Fundación Foro Nacional por Colombia, Bogotá.
- Valencia Cossio, Fabio, 2000, "Paciencia y fe", en *El Espectador*, 31 de diciembre, pág. B2.